

N/REF: 0095/2022

El proyecto remitido tiene por objeto el desarrollo de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, con el fin de contribuir al ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, así como garantizar la accesibilidad a la información y comunicación para la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, en las siguientes materias:

a) El aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos española, y la protección de la identidad lingüística vinculada a esta lengua.

b) El uso de la lengua oral a través de los medios de apoyo a la comunicación oral que contribuya a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Una versión anterior del proyecto fue objeto del Informe 52/2018 de esta Agencia, el cual tenía carácter positivo, si bien se indicaba la necesidad de tener en consideración la normativa sobre protección de datos personales y, en particular, sus previsiones referidas al tratamiento de las categorías especiales de datos personales, al implicar el tratamiento de datos referentes a la salud de las personas.

En este sentido, el nuevo texto remitido ha introducido una disposición adicional primera con el siguiente contenido:

Disposición adicional primera. Tratamiento de la información.

En las actuaciones previstas en este reglamento que tengan relación con la recogida y tratamiento de datos de carácter personal se estará a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

Teniendo en cuenta el contenido del proyecto, dicho remisión se considera adecuada, puesto que no se introducen tratamientos específicos que requieran de garantías adicionales, tratándose, en la mayoría de los supuestos, del establecimiento de un marco normativo homogéneo de actuación de las Administraciones Públicas, de modo que los posibles tratamientos de datos personales se realizarán al amparo de las bases jurídicas contenidas en las letras c) y e) del artículo 6.1. del RGPD, en los términos legalmente establecidos. No obstante, en los supuestos en los que se proceda al tratamiento de las categorías especiales de datos personales, como son los datos referentes a la discapacidad en cuanto datos de salud, deberá cumplirse, asimismo, con las previsiones del artículo 9.2. del RGPD, en los términos y con las garantías específicas que se establezca en las correspondientes leyes aplicables. Y respecto de las víctimas de violencia de género, las garantías de confidencialidad previstas en su normativa específica.

Por otro lado, persiguiendo la normativa proyectada la promoción de la posibilidad de comunicarse de las personas con discapacidad, bien a través de la lengua de signos, bien a través de la lengua oral con la ayuda de los medios de apoyo a la comunicación, o de ambas, y respecto de los programas informáticos, aplicaciones móviles y cualquier otro producto tecnológico dirigido a la habilitación y rehabilitación del lenguaje, el habla y la comunicación, debe recordarse la necesidad de cumplir con la normativa sobre protección de datos personales desde el diseño y por defecto, tal y como se recoge en el artículo 25 del RGPD, incluidos los propios desarrolladores, tal y como recuerda el Considerando 78:

(78) La protección de los derechos y libertades de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales exige la adopción de medidas técnicas y organizativas apropiadas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento. A fin de poder demostrar la conformidad con el presente Reglamento, el responsable del tratamiento debe adoptar políticas internas y aplicar medidas que cumplan en particular los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto. Dichas medidas podrían consistir, entre otras, en reducir al máximo el tratamiento de datos personales, seudonimizar lo antes posible los datos personales, dar transparencia a las funciones y el tratamiento de datos personales, permitiendo a los interesados supervisar el tratamiento de datos y al responsable del tratamiento crear y mejorar elementos de seguridad. Al desarrollar, diseñar, seleccionar y usar aplicaciones, servicios y productos que están basados en el tratamiento de datos personales o que tratan datos personales para cumplir su función, ha de alentarse a los productores de los productos, servicios y aplicaciones a que tengan en cuenta el derecho a la protección de datos cuando desarrollan y diseñen estos productos, servicios y aplicaciones, y que se aseguren, con la debida atención al estado de la técnica, de que los responsables y los encargados del

tratamiento están en condiciones de cumplir sus obligaciones en materia de protección de datos. Los principios de la protección de datos desde el diseño y por defecto también deben tenerse en cuenta en el contexto de los contratos públicos.

Por consiguiente, esta Agencia informa favorablemente el proyecto de real decreto.